



PLANETA PAZ

Sectores Sociales Populares
para la Paz en Colombia

S E C T O R

C Í V I C O S

Introducción	[7]
EVOLUCIÓN Y CONTEXTO SECTORIAL	[12]
APROXIMACIONES A LA CARACTERIZACIÓN	[19]
CONSTRUCCIÓN INTERNA	[24]
ELEMENTOS DE AGENDA	[30]



PLANETA PAZ

Sectores Sociales Populares
para la Paz en Colombia

DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN SECTORIAL

.....

Afrocolombianos
Ambientalistas
Campesinado
Cívicos
Comunicación
Culturales
Indígenas
Jóvenes
LGBT - Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas-
Mujeres
Sindicalistas
Solidarios

ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO REALIZADA GRACIAS AL APOYO
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEL REINO DE NORUEGA

©



Calle 20 No. 7-17 Of. 402. Telefax: 3 34 29 21 - 3 34 28 41
Bogotá, D.C. Colombia

**web site: www.planetapaz.org
e-mail: planetap@planetapaz.org**

Diseño: Ricardo Alonso
Impresión: Ediciones Antropos

Diciembre, 2002

P r e s e n t a c i ó n
g e n e r a l
d e l o s d o c u m e n t o s
d e c a r a c t e r i z a c i ó n
s e c t o r i a l

En su pretensión original el Proyecto Planeta Paz buscó promover, consolidar y visibilizar los sectores sociales populares en un contexto en el que el escenario de la negociación política del conflicto armado y la construcción de la paz estaban al orden del día. Para allanar esta pretensión, el Proyecto se propuso, en consenso y con una fuerte interacción con organizaciones, líderes y lideresas de los sectores sociales, construir y/o consolidar agendas sociales sectoriales, como el mejor instrumento para visibilizar las propuestas estratégicas de reconstrucción de sociedad, desde cada uno de los sectores y en un escenario de negociación del conflicto armado.

Esta tarea se constituyó también, como herramienta para lograr su visibilidad social y política y ayudar a romper así una larga tradición entre los actores de la guerra que han negado sistemáticamente la presencia protagónica de los sectores sociales populares, como actores autónomos en la búsqueda y construcción de destinos colectivos, democráticos y justos que nos lleven a una salida a la crisis profunda que padece nuestra sociedad.

Sin embargo, el cambio de gobierno implicó el cambio de la coyuntura: de un escenario de negociación del conflicto armado, pasamos a un escenario de guerra y de escalamiento del conflicto armado. Aún en este contexto, este propósito continúa siendo válido porque:

1. El panorama de la guerra no lo abarca todo y el panorama de los derechos sociales y culturales sigue en al orden del día, máxime con un modelo de desarrollo que los desconoce y los reduce a una política asistencial.

2. La Agenda social es una herramienta fundamental para presionar una salida negociada del conflicto armado con alternativas de una sociedad posible; y,

3. Es un instrumento que fortalece el deseo inquebrantable de paz como utopía que acompaña al proyecto y el tejido social que construye alrededor de él.

El equipo de trabajo del Proyecto Planeta Paz comprendió que para el desarrollo de este propósito, era necesario promover y provocar inicialmente, unos espacios de encuentro, reconocimiento y reflexión entre las organizaciones, los y las liderazas de los sectores sociales sobre un conjunto de cuestiones (evolución y contexto de acción, representatividad, relaciones intra e intersectoriales, espacios y propuestas de acción, prácticas organizativas y de visibilización, entre otras) que permitieran recoger, organizar y construir lo que denominamos caracterización sectorial.

Este ejercicio debe entenderse como un esfuerzo sistemático y colectivo de recuperación, enriquecimiento y construcción de identidades al interior de los sectores y de la manera como éstas se cruzan y se encuentran en las dinámicas de construcción intersectorial, como por ejemplo lo ha mostrado el sector LGBT en su encuentro e interacción con los demás sectores sociales que participan del proyecto y las acciones de visibilización en un marco social más general.

La recuperación y construcción colectiva de la caracterización sectorial se entendió e implementó como un proceso de formación que asumió en su sentido, en las estrategias y en las herramientas metodológicas, una postura político-pedagógica propia de la concepción de la Educación Popular.

Tener como referencia las experiencias, las prácticas y los saberes de los sujetos en un contexto de reconocimiento y de pluralidad; asumir el diálogo y la crítica argumentativa como posibilidades comunicativas que recrean representaciones e identidades; colocar la negociación cultural como herramienta en la construcción de consensos y disensos; orientar la construcción de estos nuevos saberes y experiencias hacia la transformación de condiciones de la realidad en un marco de reconocimiento crítico de las relaciones de poder, entre otros, han sido elementos constitutivos de esta postura político-pedagógica

Poco a poco la recuperación y construcción de caracterización sectorial se fue encontrando con el asunto de la Agenda sectorial. De un término de aparente significado común para el equipo de trabajo de Planeta Paz y para un buen número de líderes sociales, se paso a un concepto problemático, con diversos sentidos y valoraciones sobre su importancia y pertinencia para el momento que vivimos.

Diversas fueron las discusiones que en los diversos espacios de trabajo del proyecto se hicieron sobre el término. Muchas de ellas marcadas por afanes coyunturalistas, con poca visión estratégica y muy orientadas por los diversos intereses corporativistas en cada uno de los sectores sociales, sin que se logre trascender sustancialmente la idea de pliego o listado de peticiones.

Sin demeritar su importancia y legitimidad como factor aglutinador en los sectores sociales, la crítica se colocó en la limitación que tiene esta dinámica para la construcción de estos en sujetos históricos, o sea colectivos capaces de interlocución protagónica y válida, con suficiente representatividad y autonomía para interpelar, afirmar y concertar con otros actores, con el acumulado necesario para soñar e imaginar un mundo más allá de sus necesidades y con la suficiente capacidad estratégica y táctica para traer lo soñado e imaginado al terreno de lo concreto y lo cotidiano en el marco de una negociación permanente de intereses como camino para una reorganización radicalmente justa de la sociedad. Esta fue la idea de fondo que nos orientó en la discusión sobre Agenda Social.

Con esta idea de fondo se le otorgaron al concepto de Agenda Social las siguientes características básicas:

- Como dinámica, la Agenda sectorial es una construcción colectiva y por ello se articula a la idea de formación en el proyecto Planeta Paz. Cuando decimos construcción, no estamos desconociendo esfuerzos y elaboraciones previas en este sentido, por ello propusimos un ejercicio reconocimiento y examen de elementos de Agenda sectorial y que algunos de los documentos sectoriales que hoy presentamos, ya los contienen.*
- Como contenido, la Agenda social es un producto. Es un documento propositivo y argumentado resultante de esta construcción colectiva: como recuperación y crítica de propuestas previas, como diálogo de saberes, como ejercicios de reflexión y de discusión*

teórica y política. La Agenda social es el consenso de esta construcción, por lo que aparece como común transversal en cada sector social, pero también por lo que es intersectorialmente; pero es también disenso y tensión por los juegos de intereses que expresan los diversos liderazgos en este proceso de construcción. Como documento propositivo, la característica fundamental de la Agenda social, es su condición de propuesta estratégica; es decir, es una propuesta que define un horizonte de sentido histórico para el sector y para lo intersectorial, en términos de la reconstrucción de sociedad desde lugares de inclusión, democracia política, justicia social y reconocimiento.

- Como acción de visibilización la Agenda es movilización social. Es un instrumento de protagonismo de líderes, lideresas y organizaciones en los diversos escenarios políticos nacionales, regionales y locales. Así la Agenda es una herramienta y no un fin en sí mismo. No es por tanto, un puro y simple ejercicio académico.

De acuerdo a estas características, la Agenda social sectorial debe dar cuenta de los siguientes aspectos: la identidad y la caracterización sectorial; las propuestas; las acciones de visibilización, organización, movilización y resistencia y, los elementos de agenda intersectorial.

Llegados a este punto es posible que ubiquemos de mejor manera, en el marco del proceso del Proyecto Planeta Paz, cada uno de los documentos de identidad y caracterización sectorial con los que el lector se encontrará. Estos documentos hacen parte del entramado tejido por el Proyecto en función de la construcción y/o fortalecimiento de Agenda sectorial. Por ello no son documentos definitivos; son documentos que, expresando un punto de llegada, abren nuevas puertas proponiendo nuevos lugares de reflexión ó interrogando el mismo punto de llegada.

En este sentido, los documentos aquí presentados son documentos de trabajo cuya función es incentivar la reflexión y la producción colectiva al interior de los sectores que interactúan con el Proyecto Planeta Paz en perspectiva de socializar y profundizar una discusión sobre las propuestas de Agenda sectorial y aquellos elementos que empiezan a constituir Agenda intersectorial.



APROXIMACIONES A UNA CARACTERIZACIÓN DE LO CIVICO¹ - POPULAR HOY EN COLOMBIA



*Negar la utopía equivale a claudicar
ante una realidad alienada,
ante un proceso histórico
crecientemente dominado
por la acción instrumental,
ante una realidad oprobiosa y mezquina,
ante una vida social estrecha
y carente de gratificaciones.*

DARÍO BORERO URIBE, *El derecho a la utopía.*

Introducción

¹ Este documento está sujeto a las observaciones, comentarios, críticas, adiciones o sustracciones que propongan los cívicos desde las regiones y desde sus organizaciones en todo el país. Esperamos sus aportes para enriquecerlo y ponerlo a discusión de todos, en cumplimiento de los objetivos del Proyecto Planeta Paz y de los intereses del sector en particular.

Poco antes del arribo a la presidencia de la República de Álvaro Uribe Vélez las movilizaciones sociales colombianas más importantes desde el ámbito de lo que suele identificarse como cívico-popular estaban relacionadas con el fenómeno de los servicios públicos domiciliarios y los espacios del control ciudadano. Usuarios, voceros gubernamentales y representantes de las empresas, jugando de manera alterna en espacios radicalmente diferentes: los primeros, por las vías de hecho; los

segundos y terceros, mediatizados por la ley. Ambos escenarios con resultados tan positivos como controvertibles.

Escenarios que conjugan los tradicionales métodos de participación popular en temas de medular importancia para la gente, con los nuevos espacios que a partir de 1991 brinda la Constitución Colombiana. Dos formas distintas mas no opuestas de intervención ciudadana alrededor de los fenómenos de los servicios públicos, la corrupción o la gestión misma de los gobiernos en todos sus niveles, obligándonos a volver sobre la caracterización del sector cívico.

Miremos lo que acontecía en el litoral Atlántico la primera semana de julio del año de 2002 en una sucesión de hechos que marcarían así el accionar de los sectores populares en esa parte del país a lo largo del segundo semestre de ese año y comienzos de 2003: permanentes taponamientos de vías arterias, agrios enfrentamientos entre comunidad y fuerza pública, asonadas con destrucción de las instalaciones de entidades públicas y de servicios domiciliarios, además de varias víctimas fatales y decenas de contusos, además de traumas con los mandatarios locales y regionales acorralados por alzamientos populares de consecuencias imprevisibles, en virtud de permanentes y traumáticos cortes en el servicio eléctrico.

Mientras en Soledad y la zona de Gran Abastos en Barranquilla, así como en populosos sectores de Montería, Cartagena y Riohacha, cientos de hombres y mujeres se lanzaban a las calles en protesta por los cortes masivos del suministro del fluido eléctrico por cuenta de Electricaribe y Electrocosta², en Bogotá y casi todas las capitales de departamento se celebraban Audiencias Públicas evaluatorias de la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país, por convocatoria de la Contraloría General de la Nación³.

Las movilizaciones del Atlántico fueron desmontadas temporalmente en aquella oportunidad una vez las partes habilitaron espacios de discusión alrededor de irregularidades como la cartera de morosos, entre usuarios particulares y oficiales. Las Audiencias Públicas, por su parte, aunque carecen de fuerza obligante, constituyeron un espacio de diálogo sano en la búsqueda de soluciones a los problemas más sentidos por la comunidad, las prestadoras de los servicios y el propio Estado con sus entes regulatorios, como ha venido ocurriendo durante los últimos años.

² Empresas de propiedad de Unión Fenosa, multinacional de origen español.

³ Audiencias de media jornada, la mitad de las cuales es utilizada en informes institucionales que generalmente son conocidos por usuarios y opinión pública justo hasta ese preciso instante.

¿De qué manera se relacionan ambos espacios? Indudablemente, muchos de los líderes que participan en las movilizaciones callejeras con taponamientos de vías y acciones de hecho que incluyen enfrentamientos con la fuerza pública, son los mismos que asisten a la Audiencias, aquellas donde a lo sumo presentan preguntas por escrito, levantan la voz y gritan. Tendríamos que preguntarnos entonces sobre las formas como se relacionan los Vocales de Control e integrantes de las Veedurías Ciudadanas con los Comités cívicos, Comandos de paro o Comités pro-defensa de..., que se constituyen públicamente y hasta obligan el establecimiento de mesas de negociación. Al fin y al cabo, en estos escenarios se cruzan todas las acciones usualmente identificadas como «cívicas». Pero entonces, ¿qué entendemos hoy por acciones cívicas y movimientos cívicos en momentos en los cuales desde el propio Estado se invoca al «comunitarismo» y la «resistencia civil», como una manera de desarrollar la llamada sociedad civil⁴ que le garantice a ese mismo Estado algunos niveles de legitimidad?

Ahora bien, ¿los nuevos espacios de interacción ciudadanos constituyen por sí mismos prácticas hasta ahora descubiertas desde el sector cívico-popular? ¿Entre las prácticas implementadas podemos incluir acciones de desobediencia popular, como aquellas protagonizadas por los deudores del sistema UPAC, con importante incidencia en la opinión pública y en el Legislativo, así como fugaces campañas contra la corrupción que utilizaron el elefante a manera de símbolo contra la corrupción? ¿También las estrategias de resistencia a los lanzamientos de los deudores morosos que van desde el bloqueo y enfrentamiento abierto de barrios enteros en defensa de una vivienda digna hasta el desmantelamiento y/o demolición de la misma? ¿o aquellos grupos que de manera desesperada se crucifican o se entierran, decretan la huelga de hambre y hasta se cosen sus bocas, por causas como las elevadas tarifas de los servicios públicos? Finalmente, ¿qué va del concepto de lo cívico al de lo «ciudadano», y de cada uno de estos al de lo «civil»?

⁴ CASTELLS, Manuel. *El poder de la Identidad*. «En la concepción de Gramsci, la sociedad civil está formada por una serie de «aparatos», como la(s) iglesia(s), los sindicatos, los partidos, las cooperativas, las asociaciones cívicas, etc., que por una parte prolongan la dinámica del Estado pero, por otra, están profundamente arraigados entre la gente», pág. 31, Ediciones Siglo XXI.

Las respuestas pueden ser tan variadas como distantes. Lo más probable es que Planeta Paz concluya su misión sin agotar la riqueza de los interrogantes planteados. La inclusión de las organizaciones cívico populares en el espectro de sectores sociales con los cuales Planeta Paz comenzó actividades a finales de 2000 (14 en total que poco después se convirtieron en 11, más el grupo de comunicaciones que se configuró comenzando el 2002), estuvo marcada por el debate acerca de su pertinencia. Las

opiniones estuvieron divididas al interior del Equipo de Animación del Proyecto. Algunos cuestionaron la inclusión de las organizaciones cívicas como sector social, por considerar su composición y accionar un eje transversal que más bien debería trabajarse en cada uno de los demás sectores sociales; es decir, desde el mundo de los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, los gays y lesbianas, los ambientalistas, etc. Entre otras razones se argumentó el grado preocupante de dispersión que presentan hoy este tipo de organizaciones, como posteriormente fue reseñado a lo largo de los distintos talleres tanto en lo nacional como en las regiones. Otros, por su parte, desecharon dicha posibilidad ante la inexistencia de movimiento como tal. Finalmente se abrió paso una posición tal vez más pragmática y menos escéptica después de dos argumentos contundentes: de un lado el ascenso al poder regional de Floro Alberto Tunubalá en el Cauca, fruto de un trabajo de década y media a partir de una serie de movilizaciones cívicas en el departamento y el Macizo Colombiano, con expresiones organizativas de carácter regional afincadas en lo agrario, incluida la fenomenología indígena en esa parte del sur del país.

El punto final del debate lo colocó el objeto mismo del Proyecto: si la misión de Planeta Paz es el fortalecimiento de los liderazgos sociales-populares para la acción política y en los espacios de paz, ¿por qué no contribuir a fortalecer y rescatar lo cívico-popular como una alternativa para la construcción y reconstrucción de la Colombia que le han negado a las mayorías? Al fin y al cabo, el espectro y gama de lo «cívico-popular» ha hecho los méritos necesarios para que se le brinde una nueva oportunidad teniendo en cuenta, claro está, que sus acciones no pueden medirse ni valorarse como podríamos hacerlo con lo sindical, lo agrario o lo indígena. Fuera de la enorme cuota de sangre y padecimientos que los liderazgos cívicos han pagado por erigirse como portavoces de núcleos importantes de ciudadanos, la construcción de parte considerable de los cambios democráticos registrados en la reforma constitucional de 1991 tuvo como antecedente y sintomatología justamente las luchas y demandas cívicas. Tanto en materia de espacios de participación ciudadanos y en la elección popular de los administradores públicos como en el establecimiento de organismos de control en los cuales alguna incidencia se otorga al constituyente primario. El reto consistiría, entonces, en contribuir en la construcción de una Agenda que en el futuro inmediato y mediano sirva de guía al conjunto de organizaciones cívico populares colombianas, en momentos de recrudescimiento de la guerra interna y mientras los liderazgos sociales se resisten a ser avasallados por el terror, la desesperanza

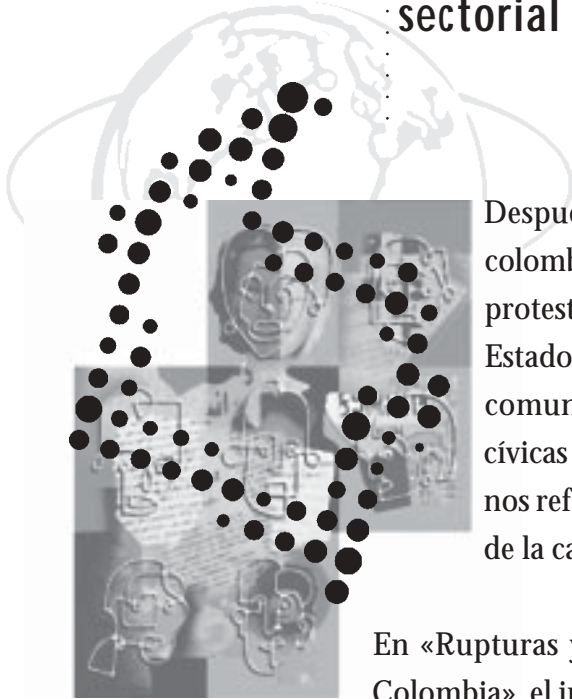
y la muerte. De ello dan cuenta los resultados electorales de la contienda para Congreso y Presidencia de la República. Sin olvidar que las expresiones cívico-populares pueden ser consideradas pioneras en participación política, aunque no siempre exitosas desde el espectro de lo social.

Será importante, entonces, aventurar aproximaciones y conseguir acercamientos en la búsqueda de soluciones teóricas y prácticas frente al concepto de lo cívico en los albores del siglo XXI, tanto en Colombia como en el mundo donde existe un acalorado debate alrededor del concepto del ciudadanía, salpicando lo cívico.

Lo significativo para nosotros será que a partir del estado en que se encuentren las discusiones y el desarrollo de las organizaciones cívico populares, seamos capaces de diseñar y proponer una Agenda, un programa para la acción que involucre a unos y otros. Es decir, tanto a quienes fácilmente podríamos caracterizar como cívicos en la usanza tradicional –o sea, por fuera de los espacios gubernamentales y con una fuerte ebullición social–, como a los miles y miles de hombres y mujeres que gustosos se han involucrado en la gama de espacios de participación que la Constitución del 91 le dio al constituyente primario, con la ilusión de contribuir a diseñar el país que ellos imaginan y desean.



Evolución y contexto sectorial



Después de los años 20, cuando la incipiente clase obrera colombiana protagonizó una serie de acciones que incluía la protesta urbana y la acción parlamentaria demandando del Estado y de la sociedad mejores condiciones de vida para la comunidad, tal vez es la década del 80 cuando las luchas cívicas se acercan más a la categoría de movimiento, a la cual nos referiremos más adelante, cuando abordemos el asunto de la caracterización.

En «Rupturas y continuidades, poder y movimiento popular en Colombia», el investigador y catedrático de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Múnera Ruiz señala cómo en marzo de 1909, las manifestaciones de artesanos y estudiantes contra los tratados Cortés-Root y Cortés-Arosemena, contribuyeron a debilitar la dictadura de Rafael Reyes y apresuraron su renuncia. Veinte años después, entre el 6 y 9 de junio de 1929, las marchas de apoyo a Luis Augusto Cuervo, quien había sido destituido como alcalde de Bogotá al protestar públicamente por la mala y costosa administración del acueducto municipal, en cabeza de las clientelas del ministro de Obras Públicas y del Presidente Abadía Méndez, derivaron en una abierta pugna con el gobierno y terminaron de resquebrajar la hegemonía política del partido conservador.

Por su parte, en la «Nueva historia de Colombia», Mauricio Archila destaca los alcances del movimiento sindical al incursionar en la arena política consiguiendo una muy importante representación parlamentaria que intentaría recoger el sentir y las aspiraciones populares de la época, con todas las dificultades que ello implicaba por la carencia de estructuras organizativas más sólidas orgánica y conceptualmente.

El historiador Medófilo Medina recoge una serie de elementos de lo que podría calificarse como protesta urbana alrededor de algunos hitos del siglo XX, como «la caída en 1909 del general Reyes, como una manifestación con contenido anti-imperialista; luego las jornadas

del 6 al 9 de junio de 1929 en que cae la hegemonía conservadora, independientemente de que se formalice en las elecciones de febrero de 1930; luego, el primero de mayo de 1936, cuando un gobierno que intentaba un reformismo tímido, el de López Pumarejo, acosado por una oposición de derecha, acude a las masas obreras y se realiza una movilización -el Espectador hablaba de 70 mil personas que salieron a la calle en Bogotá, una ciudad con 138 mil habitantes-; posteriormente se presenta el levantamiento popular espontáneo del 9 de abril de 1948; y, por último, antes del 77, el paro cívico de mayo de 1957 que acabó con la dictadura de Rojas Pinilla»⁵.

Cada momento de esos, dicha protesta significó un punto de viraje de la historia política colombiana. Es decir, hubo una impronta en esos cambios, ahora esa impronta, ese sello se siente ambiguo. Para Medina, «sus resultados son inequívocamente progresistas en 1909, en 1929 o en el 36, el aplastamiento del levantamiento popular espontáneo del 9 de abril fue el último elemento que le faltaba a la oligarquía colombiana para desencadenar del todo la época de la violencia. El aplastamiento de esa protesta permitió la ofensiva que va a girar hasta 1964, digo por lo menos en la violencia. El Paro Cívico de 1977 se inscribe en esa lógica, pues, por supuesto, creo que el último trecho de la historia colombiana en el cual estamos viviendo, se abre en el 77».

Efectivamente, el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 había estremecido a la opinión pública nacional e internacional al develar la magnitud de la inconformidad en una comunidad que no reparó en el origen sindical de la convocatoria a la protesta, así se focalizara fundamentalmente en las grandes capitales, empezando por Bogotá. Con logros y alcances todavía debatidos por investigadores y luchadores, lo cierto es que en la práctica esa jornada dividió en dos la historia de las luchas sociales en Colombia.

Para empezar, la administración Turbay Ayala que iniciaría mandato un año después se caracterizó por imponer el llamado Estatuto de Seguridad, mediante el cual se pretendió aplacar la inconformidad popular en Colombia, marcando el comienzo de una época de guerra sucia que aún no termina.

⁵ MEDINA, Medófilo. Panel «El paro cívico del 14 de septiembre de 1977, enseñanzas y proyecciones», memorias del primer Taller Nacional de Líderes del Sector Cívico Popular vinculados al Proyecto Planeta Paz, Bogotá, septiembre 21 de 2001.

Independientemente de si las luchas cívicas son una expresión estrictamente urbana y/o regional -a lo sumo-, lo cierto es que a mediados de los 80 bullían las acciones cívicas a lo largo y ancho del país, adquiriendo por momentos perfiles de movimiento.

Desde el nordeste antioqueño hasta el extremo sur y norte, también en la región andina, pasando por los llamados territorios nacionales en ese entonces y las costas, los paros y acciones de taponamiento de vías, bloqueo a los terminales aéreos o marítimos, marchas campesinas e indígenas, se convirtieron en pan de cada día y se extendían como una mancha a lo largo del país. El gobierno tuvo que especializar un grupo de funcionarios suyos en suscribir acuerdos con comunidades urbanas y rurales. Acuerdos incumplidos la mayoría de las veces.

Fue tal su florecimiento y contundencia que en 1983 se creó de la Coordinadora nacional de Movimientos Cívicos, CNMC, con avances significativos en materia de centralización y coordinación de actividades⁶, pero también con visos de radicalismo. A los debates ideológicos alrededor del promisorio nicho de movilización popular se sumó la guerra, acallando la voz de sus dirigentes.

El país ya había registrado antecedentes en ese mismo sentido, como lo anotó Medófilo Medina. Según el catedrático de la Universidad Nacional, «quien mejor provecho le sacó al paro del 14 de septiembre fue la propia oligarquía que encontró la manera de definir una nueva etapa de implementación capitalista a través de la represión: creo que buena parte de la iniciativa la tomó la burguesía»⁷, sentenció el historiador.

Después de la segunda mitad de la década de los 80, con el exterminio de la Unión Patriótica también fue acribillada a tiros la dirigencia cívica más representativa de todas las comarcas territoriales y conceptuales, unidos entre sí por el interés de servir a sus comunidades. La efímera vida de la Coordinadora nacional de Movimientos Cívicos no alcanzó ni para sistematizar el cartapacho de acuerdos suscritos con los representantes del gobierno en todos sus niveles. Frustrando así el salto de las luchas cívicas, aisladas o regionales en el mejor de los casos, a la categoría de movimiento nacional.

Pero las movilizaciones cívicas continuaron en medio de la guerra. Tan esporádicas como la irrupción abrupta de las

⁶ Las condiciones estaban dadas, entre otras razones por la confluencia de organizaciones regionales de coordinación cívica. En Santander, surge el Movimiento Cívico Popular Comuneros que reúne comandos cívicos de San Gil, El Socorro, Málaga, Bucaramanga, Piedecuesta, Confines, Suaita, Curití, Charalá, Vélez, Puente Nacional, Barbosa, San Vicente y Barrancabermeja; en la región del Sarare, las organizaciones cívicas toman la forma de los Comités de Planeación y Desarrollo; en el nordeste antioqueño la Coordinadora Regional de organizaciones cívicas que enfrentan los excesos en el servicio de la energía eléctrica logra enraizarse tanto en la gente que un grupo muy representativo de sus principales exponentes desarrollan posteriormente experiencias de gobierno dignas de tomar en cuenta, otros más fueron asesinados; al extremo sur del país emerge el Movimiento Cívico-Popular por Nariño, con la organización política Los Inconformes al frente, involucrando casi la totalidad de municipalidades de ese departamento en sus acciones.

⁷ MEDINA, Medófilo, *ob. cit.*

necesidades sociales en la gente. Prácticamente sin hilo conductor. Sin embargo, expresiones de la acción cívica pueden mostrar alguna continuidad, en especial aquellos núcleos que aprovechando la popularidad de su dirección se lanzaron a la arena política. Con resultados que se debaten entre el éxito y el desastre, muchas veces debido al deslizamiento de sus portavoces hacia orillas distintas a las originales.

Para la investigadora del CINEP, Martha Cecilia García⁸, la elección de autoridades locales y los espacios de participación en la vida municipal que se abrieron paso a mediados de los 80s, de alguna manera fueron aprovechados por los movimientos cívicos que habían acumulado experiencia en la movilización y en la negociación de sus conflictos, las cuales les dieron la posibilidad de definir plataformas mínimas electorales.

Algunas movilizaciones cívicas nos remontan al drama de núcleos agrarios como el de los caficultores y los productores de algodón, cuando no a los cacaoteros del oriente colombiano. También a las acciones en defensa de la vida protagonizadas los últimos tiempos por los pobladores de Urabá, sur de Bolívar y Barrancabermeja, Magdalena Medio, entre otras regiones.

Una de las principales expresiones de la lucha cívica se ubican en el Macizo Colombiano, zona de confluencia de varios departamentos y distintas culturas y etnias, cruce además de los intereses de provincia urbana y rural, cuyas primeras expresiones se remontan a la época en que se promulgaba la Constitución de 1991. Finalizando agosto de ese año, el Comité de Integración de Macizo Colombiano, CIMA, suscribiría la primera acta de compromiso como región con representantes de los gobiernos departamental y nacional, asegura Edgar Montenegro⁹, ex secretario ejecutivo de la Coordinadora nacional de Movimientos Cívicos.

⁸ GARCÍA, Martha Cecilia. *Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia*, Centro de Estudios Sociales, Universidad Nacional e Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá, 2001.

⁹ MONTENEGRO, Edgar. «Memorias del futuro», julio de 2000, ponencia presentada ante el IX Congreso de Antropología, Popayán, Cauca.

El país continuó escuchando del Cima por combinar acciones de hecho con la incursión en política, obteniendo importantes resultados en concejos y alcaldías durante las elecciones de marzo de 1992. Al paro cívico del Macizo del 96 siguió la parálisis de 27 días a finales de 1999, en demanda del cumplimiento de sucesivas actas de compromiso. Popayán quedó bloqueada, así las movilizaciones se originasen en sitios distantes y periféricos, enseñando que afectando la periferia se golpea también los centros de poder.

Los mayores logros del CIMA en la combinación de la movilización callejera con las urnas fueron obtenidos durante los comicios electorales de 2000, cuando se fundieron en el Bloque Social Alternativo, alzándose con la gobernación del Cauca en cabeza del indígena guambiano Floro Alberto Tunubalá.

Independiente de los resultados que hasta ahora arroja la gestión en el Cauca, distintos analistas coinciden en considerar que el fenómeno del CIMA devela el renacimiento de una expresión de lucha popular que durante la década anterior llegó a considerarse extinto.

Los pobladores urbanos y rurales continúan recurriendo a las acciones colectivas en la búsqueda de soluciones a sus necesidades, tratando de dotarse de algunos niveles de coordinación. Fenomenología que de alguna manera se refleja también en la elección de mandatarios en regiones como Tolima, Huila y Nariño, conformando con Cauca un bloque de gobernaciones ligadas a sus comunidades, opuestas a la guerra y proclives a la solución política negociada del conflicto armado.

Excepto el fenómeno caucano y, a lo sumo, los alcances obtenidos por los llamados «raspachines» tras las imponentes movilizaciones de mediados de 1996 que fueron violentamente intervenidas por la fuerza pública cuando se iniciaban las fumigaciones de plantaciones de hoja de coca en distintas zonas del país, los mecanismos de coordinación de las acciones cívicas han sido efímeras. Las explosivas protestas cívicas de mediados de la década anterior contra de la reestratificación urbana y rural, se diluyeron con el aplazamiento y suavización de la medida. A mediados de 2002 quienes muestran una significativa coordinación alrededor del flagelo de la energía eléctrica y los servicios públicos, son los costeños.

Claro, el escandaloso incremento en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que sigue a la enajenación de empresas, los compromisos adquiridos por el gobierno con los prestamistas internacionales, y el saneamiento de las pocas empresas de carácter oficial que aún subsisten con el fin de subastarlas, viene generando importantísimas muestras de reactivación de la movilización popular. Máxime cuando las prestadoras del servicio imponen sus políticas, pasando por la faja las opiniones de los mandatarios locales, regionales y aún nacionales, como lo hicieron y continúan haciendo Electricaribe y Electrocosta (léase Unión Fenosa, empresa multinacional de origen español propietaria de ambas electrificadoras), en el Litoral Atlántico. O sea, las multinacionales del capital violentando la soberanía nacional de los gobiernos donde tienen sus inversiones, amparados en las nuevas normas que rigen el comercio y las relaciones internacionales.

Con un ingrediente que es necesario tener en cuenta para su análisis: las movilizaciones de raspachines en los antiguos territorios nacionales y pobladores urbanos y rurales contra la reestratificación, incluso en las goteras de Bogotá, no se habrían producido, al menos con la contundencia que lo hicieron, sin el concurso de las juntas de acción comunal¹⁰. La mayoría de líderes de los raspachines y de los pobladores urbanos y rurales que se alzaron contra la reestratificación, lideran también las juntas de acción comunal. Ejercen el doble rol, así en otros espacios de lo social continúe viéndose lo comunal con beneficio de inventario por la influencia del bipartidismo. Para Luis Emiro Valencia y Camilo Borrero, «las Juntas de Acción Comunal, creadas en 1958 para vincular a los sectores populares con el Frente Nacional mediante programas de autoayuda, empezaron a ganar autonomía y a distanciarse del liberalismo y el conservatismo».

Similar fenómeno de desdoblamiento del rol de liderazgos se observa en los nuevos espacios de los usuarios de los servicios públicos. En más de la mitad de los municipios colombianos se han conformado Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, CDCS-SPD¹¹, espacios de participación ciudadana creados a partir de la reforma constitucional de 1991 por recomendaciones de la propia banca internacional como una manera de paliar la reacción de los usuarios.

¹⁰ En necesario «enfatar en el alto grado de debilidad organizacional y la crisis de liderazgo existente en el movimiento comunal, como la expresión más representativa de lo cívico y que ha permitido a las empresas prestadoras de los servicios públicos permear la gran mayoría de los líderes comunales con prebendas y sobornos de todo tipo»: Memorias de los talleres adelantados por Planeta Paz en la Región Caribe.

¹¹ DAZA, Víctor. «Control social en los servicios públicos domiciliarios». Ponencia presentada al taller nacional de líderes de organizaciones cívico populares. La Mesa, Cundinamarca, septiembre de 2001.

¹² Primer Congreso Nacional de la Salud, octubre de 2001, memorias.

Las luchas de los usuarios del sistema UPAC -expresión de las luchas por la vivienda que también caracteriza algunos de los ejes de las movilizaciones cívicas de los últimos tiempos-, como las de los servicios públicos, y las de los trabajadores y usuarios del sistema nacional de salud, han logrado establecer instancias de coordinación significativas. Al punto que los primeros obligaron al Congreso introducir algunos cambios en la estructura del UPAC, con cambio de membrete también, y los últimos (nos referimos a usuarios y trabajadores de la salud) realizaron un primer congreso nacional¹² que deja importantes espacios y posibilidades de coordinación a todos los niveles, rompiendo el esquema de la delegación.

Los usuarios de los servicios públicos continúan tratando de ampliar los niveles de organización y coordinación más allá de

ciertos municipios, ciudades y micro regiones. Luchan por establecerse como un solo interlocutor, echando mano de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios reglamentados a través de la Ley 142 de Servicios Públicos de 1994 e impulsados desde las propias operadoras, incluso privadas. Fenómeno que no puede atribuirse de manera exclusiva a una posible grandeza de las empresas y los gobiernos. Se trata, mas bien, de la preocupación por establecer nuevas relaciones con los usuarios, en desarrollo de una serie de relaciones a la vez de oposición y apoyo al Estado. Una suerte de apoyo crítico que les permite manejar cierta independencia.

Hoy los comités de usuarios de los servicios públicos cobran importancia en el contexto nacional, obligando a las empresas prestadoras a atender los reclamos y demandas de los usuarios como una manera de contener el malestar creciente en la gente por las altas tarifas, también por las maneras fraudulentas y ventajosas de facturación, una epidemia por momentos peor que la de las tarifas¹³. En junio de 1999 tuvo lugar el Encuentro nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, iniciándose así un intento de organización, de la mano con la constitución de Consumidores Colombia, Coco, como un nuevo escalón de expresiones civilistas de la sociedad. Desafortunadamente, Coco no consiguió despegar por diversas causas.

En el contexto de las expresiones cívico populares, la lucha contra los abusos en los servicios públicos domiciliarios despunta como la que mayores posibilidades tiene de establecer niveles importantes de coordinación nacional, en especial por su apalancamiento constitucional y legal. Mediante un proceso similar, a finales de los años 60 se catapultaron las organizaciones de usuarios campesinos, ANUC. Más recientemente, fueron las madres comunitarias a comienzos de la década pasada, después de haber sido creadas como una estrategia para debilitar los hogares infantiles de Bienestar Familiar: se convierten en un factor de fuerza tal que mediante sus movilizaciones ganaron algunos reconocimientos salariales y en materia de seguridad social.

¹³ Solamente en Bogotá durante los últimos dos años fueron cambiados de manera arbitraria 200 mil contadores de agua y luz, con cargo al usuario, denunció Luis Orlando González, vocal de control, durante el Foro Distrital de Servicios Públicos que se realizó el 13 de julio de 2002 a instancias del Frente Social y Político.

Aproximaciones a la caracterización



Uno de los temas más debatidos a lo largo del trabajo emprendido por Planeta Paz en su primera fase fue la caracterización de lo Cívico dado que puede representar su universo de significados.

Al respecto, es importante considerar aquí, que los primeros acercamientos de Planeta Paz con los liderazgos cívico populares se gestaron a mediados de 2000 a propósito de la conformación del Comité Asesor del Proyecto; varios líderes cívicos de regiones fueron convocados a hacer parte de dicho organismo. En abril de 2001, una docena de ellos participó del Primer Seminario Internacional, y entre el 21 y 23 de septiembre de ese mismo año se celebró el primer taller nacional de líderes del sector en Bogotá y La Mesa, Cundinamarca, con participación de 59 dirigentes -19 mujeres entre ellos- de 44 organizaciones distintas. El comité sectorial fue integrado con personas que han compartido espacios de coordinación de esta transversal de la acción social en Colombia, desde paros y movilizaciones, tanto en lo regional y nacional como en disciplinas y espacios que van desde la salud, la vivienda, el cooperativismo, la acción comunal, las organizaciones agrarias, expresiones municipales y barriales de nucleamiento juvenil o cultural, las comunicaciones, la investigación social, los servicios públicos y el trabajo social, entre otras, hasta reivindicaciones regionales, locales, étnicas, raizales y territoriales. También intentamos acercarnos a los llamados raspachines de la hoja de coca, aunque sin mayores posibilidades reales a la hora de integrarlos al comité sectorial, especialmente por causas de localización. Posteriormente los acercamientos se extendieron a una serie de liderazgos que pertenecían o provenían organizaciones de carácter nacional o regional ligadas a las Juntas de Acción Comunales, los servicios públicos, la salud o intentos de coordinación cívica, así como liderazgos raizales, para el caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero donde definitivamente se abrieron las relaciones con liderazgos cívicos de provincia y regiones fue a partir de la estrategia de trabajo regional implementada por el Proyecto que se inició en 2002.

Allí han comenzado a llegar los líderes que hoy por hoy inciden en la Coordinadora Cívica del Atlántico que ha tenido que enfrentar los excesos de Electricaribe y Electrocosta; también los líderes cívicos del Tolima, empeñados en sacar adelante la Segunda Constituyente de ese departamento con un ejercicio de deconstrucción, construcción y reconstrucción municipal y regional que empieza a replicar en Nariño, en compañía de las experiencias del Cauca y Valle, entre otros; en Huila se ha contado con el acerbo de la Escuela para la Democracia, de la Universidad Surcolombiana, la única escuela de formación profesional de liderazgos cívicos existente hoy en Colombia. En Antioquia y el Eje Cafetero, una de las grandes fortalezas reveladas hasta ahora pueden estar inmersas en las experiencias de lucha por el derecho a la vida y el establecimiento de territorios de paz como una dolorosa realidad del país, de manera inversamente proporcional a las vivencias de los liderazgos cívicos de los Santanderes y los antiguos territorios nacionales.

Por su parte, Javier Giraldo¹⁴ definió las acciones cívicas como un conjunto de acciones colectivas coordinadas por un grupo relativamente estable, espaciadas en un tiempo prolongado, con objetivos reivindicativos o propositivos que tienden a la satisfacción de demandas sociales de un amplio sector poblacional. Los movimientos cívicos no son simples aparatos organizativos ni restringen su acción a un paro o a una movilización, aunque se forman y desarrollan a través de luchas y conflictos. Transversalizando, es decir, interesando a todos los sectores de la población.

Ante la importancia de establecer una coherente caracterización del fenómeno para indagar por sus perspectivas posibles, resulta ineludible intentar una lectura de su pasado, lo más sistemática posible, y buscar una constatación objetiva de su presente para hacer visibles sus tendencias más generales hacia el futuro, brindando herramientas que puedan contribuir a su activación en servicio de los procesos democratizantes que anhelan los colombianos. Veamos.

Para Pedro Santana, Director de Viva la Ciudadanía, «con la denominación de cívico pretenden sus organizadores y promotores legitimar el movimiento frente a los poderes estatales, destacando el carácter general y legítimo de sus exigencias. Cívico es sinónimo de ciudadano y al mismo tiempo de a-partidista. Con ello se quiere señalar que el movimiento interesa a toda la población sin distinciones de clase y de procedencia social y se le quiere despojar de cualquier carácter político-partidista».

¹⁴ Giraldo Javier, «La reivindicación urbana», Controversia, Nos. 138-139, Bogotá, Cinep, 1987.

Múnera también considera que lo cívico «ha servido para definir acciones colectivas y contestatarias de comunidades urbanas y rurales que no pueden ser reducidas a prácticas sociales de un sector determinado por su posición estructural. En ellas confluyen obreros y campesinos con desempleados, amas de casa, madres comunitarias o comerciantes para reivindicar intereses colectivos».

Esa transversal cívica de las expresiones sociales ha tenido una figuración relevante en coyunturas importantes de la vida nacional entre las cuales se cuentan, entre otras, el 9 de abril de 1948, el paro nacional de 1957 que dio al traste con la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977, las marchas campesinas de los años 70 y 80, y una abigarrada gama de expresiones de protesta a lo largo y ancho del país. Expresiones de inconformidad colectivas en diferentes épocas, generalmente motivadas por la carencia, deficiencia cuantitativa y/o cualitativa de servicios públicos básicos, infraestructurales, en los campos de la educación y la salud, o relacionados con el déficit de vivienda popular, con la represión a las diversas formas de trabajo informal y «economía del rebusque», o con planes de renovación urbana que implican desalojos e incrementos en los impuestos por valorización en asentamientos de personas de precarios recursos; en el campo, en lo relacionado con fumigaciones, violencia, carencia de vías de penetración como caminos, carreteras o puentes, también aumentos en las cargas impositivas a los contribuyentes, entre otros. E, incluso, acciones locales o regionales que reivindican derechos o mejoras desde los gobiernos locales ante el gobierno central.

Martha Cecilia García considera que «mientras los movimientos cívicos son estructurales, continuos y orgánicos, las luchas cívicas constituyen una forma de acción reivindicativa y de participación, pero no son necesariamente expresión de una forma organizativa ni implican una propuesta de solución a las demandas que plantean»¹⁵.

El papel jugado en la historia de las luchas sociales por estas expresiones de la acción popular, la existencia de algunos medios de coordinación sectoriales o locales y el interés en identificar alternativas de organización y acción sociopolíticas salidas de las entrañas populares, que expresen respuestas y propuestas o ejercicios de poder

¹⁵ García Martha Cecilia, «Movimientos Sociales, Estado y democracia en Colombia».

constituyente y de negociación entre las comunidades y el Estado, ponen de presente la importancia que para las ciencias sociales y políticas, para el ejercicio de la ciudadanía con variables de

respuesta y salida a la caótica situación en que se debate Colombia, reviste el establecer las eventuales perspectivas de esta transversal de la acción social.

Sin embargo, no resultan suficientes para establecer tales perspectivas los datos contradictorios de su caracterización como «movimiento», «movimientos» o «acciones», pues cualquiera de dichas caracterizaciones condicionaría las perspectivas a nivel de alcances estratégicos y elaboraciones tácticas y operativas.

Lo único ante lo cual se nota un consenso es frente a los datos que hacen relación a su carácter socialmente heterogéneo, policlasista aunque popular y democrático, a su no adscripción a partidos políticos mas no apolítico, pese a que sus integrantes en cada momento suelen tener alguna adscripción y no pocas veces la manipulación les hace funcionales a tendencias del espectro político partidista. Otro dato claro se refiere a su fugacidad, sectorialidad de las problemáticas sociales a las que responde, y a la espacialidad local o regional en que suele producirse, así como su carencia de organicidad. La construcción de identidades regionales o étnicas, o los programas para lograr una mejor gestión de los recursos públicos estaban orientados a disputarle la administración de la vida colectiva -o de algunos aspectos de ella- a las élites dominantes y los partidos tradicionales¹⁶.

Bonaventura de Sousa Santos trata de explicar los fenómenos de involucramiento político de las organizaciones cívicas planteando que «el movimiento cívico contestatario, de confrontación, se va convirtiendo en alternativa de construcción de algo. Entonces invaden terrenos, empiezan a construir casas, y como para construir casas necesitan ventanas, puertas y chapas, montan una pequeña empresa autogestionaria que hace puertas, otra que hace cerrajería, y otra que engorde los cerdos, porque la gente almuerza y come ahí. Luego produce a gran escala proyectos autogestionarios, cuestiones para el acueducto, para el alcantarillado. Viene otra gente para la comisión de energía. En un momento dado hay tantas personas vinculadas a la empresas autogestionaria que deciden elaborar un proyecto político y económico propio con el alcalde, con un alcalde de los nuestros o nombrar a un compañero»¹⁷.

Las acciones cívico populares no son apolíticas, máxime si tenemos en cuenta la experiencia de incursión en escenarios políticos señalada atrás, con todos los riesgos que ello implica, también con el oportunismo de caciques tradicionales que utilizan el membrete

¹⁶ Múnera Leopoldo, «Rupturas y continuidades, poder y movimiento popular en Colombia», pág. 448.

¹⁷ Ibid., pág. 410.

de lo cívico como una manera de reencauchar u ocultar su verdadero origen antipopular. En su desarrollo, sus acciones se mueven en medio de las diversas concepciones y objetivos políticos de las que son portadores sus integrantes. Pero de su concatenación no emerge el sesgo hacia alguna de tales políticas en específico sino que aparece un consenso tácito, de hecho. Ejercicio de poder desde el constituyente primario.

Se diferencia de los hoy clasificados como movimientos sociales porque debido a la amplitud de su espacio y de su acción trasciende la circunscripción que, en particular, especializa a estos movimientos en torno a problemáticas de género, generacionales, de derechos humanos, étnicas, ambientales, etc., o de investigación y capacitación, y a la vez las incluye a todas en un horizonte más amplio.

Mientras el movimiento sindical, los partidos políticos y los movimientos sociales circunscribirían limitadamente las acciones cívicas, éstas en cambio pueden contener a aquellos en coyunturas concretas, ampliando su incidencia sobre el estado de cosas en la sociedad.

Mención especial merecen las tendencias organizativas de los raizales en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, congregadas en AMEN (anteriormente conocido como Sons of the soil, S.O.S., o los Hijos de la tierra), un movimiento con fuerte presencia de las islas. Son una tendencia étnica que, a su vez, igual filtra las principales necesidades de los lugareños, unos 30 mil raizales frente a 70 mil continentales (se estima que fuera de las islas viven otros 20 ó 30 mil raizales, especialmente en Panamá, Nicaragua y Estados Unidos). Reconociendo que no están preparados para asumir una independencia, demandan del Estado colombiano autonomía política y administrativa, y autodeterminación.

En similares condiciones de expresiones regionales ubicamos la experiencia del CIMA y el Bloque Social Alternativo del Cauca presentes durante el taller, de la cual nos referimos al comienzo del documento. Su importancia se catapultó tras la fuerza que durante los últimos dos años adquirió el movimiento por la surcolombianidad, en cabeza de las gobernaciones populares que cobraron enorme notoriedad con Floro Tunubalá y Guillermo Alfonso Jaramillo, al menos hasta la ruptura de las negociaciones con las FARC.

En ausencia de un espacio de coordinación nacional de acciones estrictamente cívico - populares, muchas expresiones locales de las que llegaron al taller podrían declararse a la búsqueda de mayores relacionamientos con el país nacional.

Construcción interna



Los parámetros para el diseño de una agenda de las acciones cívicas parte del reconocimiento de la relevancia que tiene hacia el futuro cívico popular la coordinación, la capacitación, la interrelación regional, la difusión y la apropiación de los problemas a los cuales son hoy más sensibles las comunidades en razón de la intensidad con que están afectando negativamente sus condiciones de vida.

Máxime a partir de la globalización de las relaciones económicas y sociales de Colombia y el mundo, pero también de las luchas sociales.

A partir del trabajo desarrollado en el Proyecto surgió la propuesta de levantar un pliego que trascienda los intereses de lo que tradicionalmente se considera cívico: el «Pliego único por la vida», el cual ha venido siendo promocionado en distintos espacios, entre ellos el Congreso Nacional de Paz que culminó en Bogotá a comienzos de mayo de 2002, y el Segundo Seminario Internacional de mediados de noviembre de ese mismo año. De manera alterna -y desde el mismo Comité Sectorial-, en virtud del caos y la crisis de gobernabilidad que cruza a Colombia surgió la propuesta de establecer Comités Locales de Reconstrucción Nacional, con participación del conjunto de las fuerzas vivas que tienen expresión en cada uno de los municipios y localidades del país. La iniciativa podría semejarse a otras dinámicas y propuestas que se vienen ejecutando en distintas regiones del país.

En el Tolima, el gobierno departamental desarrolla una intensa actividad alrededor de lo que han denominado la II Constituyente Municipal, expresión de nuestra voluntad¹⁸, con una agenda similar a la que podrían tener los Comités Locales de Reconstrucción u otras propuestas tendientes a llenar de argumentos y herramientas al constituyente primario. Y al igual que el conjunto de las acciones cívico-populares desplegadas a lo largo del país, por momentos ha sido particularmente notorio el interés de los sectores más desprotegidos de la población por

¹⁸ La II Asamblea Constituyente del Tolima (la I Asamblea Constituyente tuvo lugar en 1862, un año después de proclamarse el Estado Soberano del Tolima), se desarrolla en dos escenarios: el municipal y el departamental, involucrando dos centenares de delegados provenientes de medio centenar de Constituyentes Municipales, a todos sus alcaldes y parlamentarios, así como a los ex gobernadores y ex ministros, además, por supuesto, del actual mandatario regional y principal propulsor de esta propuesta, Guillermo Alfonso Jaramillo.

echar mano a las riendas del poder. Los Comités de Planeación y Desarrollo nacieron en la región de Sarare, Arauca en 1981 (y murieron poco después, cuando la administración de Belisario Betancur los ligó a las guerrillas del ELN como una manera de sacarlos de la arena política), como una extensión del proceso iniciado una década atrás por convocatoria de los colonos, formando la «guardia cívica» para participar en la gestión de los recursos colectivos.

Por su parte, a partir de las amenazas y atentados contra las autoridades municipales por parte de la guerrilla, la Federación Nacional de Concejos propuso sin mucho éxito¹⁹ la transformación de las células locales en Cabildos Municipales de Paz, con participación también de los distintos estamentos y fuerzas sociales, incluidos los representantes gubernamentales.

¹⁹ Realmente fue una propuesta un poco presionada por la arremetida de la insurgencia guerrillera contra los poderes locales en cabeza de alcaldes y concejales, fundamentalmente, muchos de los cuales fueron obligados a renunciar a sus cargos o abandonar sus ciudades. Otros más fueron asesinados.

²⁰ Como podrían ser, entre otras, organizaciones de mujeres, juveniles o culturales con asiento en populosos sectores de las principales ciudades, por ejemplo Ciudad Bolívar en Bogotá o el Distrito de Aguablanca en Cali; líderes de organizaciones que se reivindican «cívicas» hoy desplazados, ayer pujantes exponentes de importantes núcleos campesinos o populares; expresiones del sentimiento étnico en procura de definiciones territoriales, de soberanía, y de defensa de identidades culturales; organizaciones de madres comunitarias, así como las de padres de familia, las cuales locales, regionales y/o nacionales; los organismos de control y las veedurías ciudadanas, incluidas las personerías estudiantiles, entre otras; los canales de comunicación comunitaria y aquellos que emergen de lo social en lo local, regional, nacional y sectorial.

¿Qué va de una propuesta a otra cuando, si se quiere, todas esas iniciativas han sido motivadas por las mismas preocupaciones? ¿Cómo podríamos construir una propuesta de agenda más específica para lo cívico, sin desconocer ni desmotivar la participación en esos otros escenarios? ¿Podríamos unir todas esas iniciativas en una sola propuesta para ser abrazada, adoptada e impulsada por el conjunto de sectores sociales colombianos, en la idea de construir un nuevo Estado, una nueva Nación?

La aproximación a una respuesta a los interrogantes planteados esta cruzada por otra tensión: la articulación con una gama de líderes y organizaciones expresadas hoy como formas de las luchas urbanas en nuestro país, algunas más novedosas que otras²⁰.

Partiendo del carácter transversal de los liderazgos y las formas de organización cívico-populares, es necesario atender su recurrente participación en los espacios políticos, una práctica que podría remontarse casi hasta sus orígenes, a diferencia de la mayoría de las expresiones sociales populares. Fenómenos como el cruce de alianzas que se proclaman «cívicas» para diferenciarse de los partidos políticos, en especial de los tradicionales, pero también de los de izquierda y los propios actores armados, merecen análisis detenido.

Igual ocurre con otras expresiones de participación ciudadana en la construcción de poder y democracia. Por ejemplo, los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios, CDCS-SPD, los cuales se perfilan como una alternativa de organización por la base, siempre y cuando no sean permeados por el clientelismo y la corrupción, ahora participantes del Comité Sectorial de Planeta Paz, al igual que expresiones organizadas de las veedurías ciudadanas.

La lucha contra la corrupción y los abusos en las tarifas y la prestación de los servicios públicos domiciliarios está íntimamente relacionada con las luchas invisibles con que irrumpió el nuevo milenio en el planeta: las luchas contra las imposiciones del FMI, los prestamistas internacionales y sus efectos sobre la calidad de vida de la gente. Es pertinente interesar aún más al conjunto de organizaciones cívico populares en las ligas de usuarios y los comités de control de los servicios públicos, construyendo espacios comunes a todos los sectores involucrados en Planeta Paz, independientemente del perfil predominante que ellas tengan. En el taller nacional, por ejemplo, tuvimos expresiones de la lucha por la vivienda, desde la gestión hasta la toma de tierras inoficiosas: dos caras de una misma moneda. Similar también al caso de líderes de la Costa Atlántica que se desempeñan como vocales de control de la energía, a la vez que hacen parte activa de los comités cívicos de defensa de los usuarios y comités de paro.

Cobrar tal importancia el espectro de los CDCS-SPD que sus vocales vienen ganando una serie de demandas, tutelas y acciones de cumplimiento contra empresas de servicios públicos, favoreciendo miles de usuarios de los estratos más bajos, víctimas de toda clase de abusos. Codensa, empresa mixta con capital de origen español, ha sufrido algunas derrotas por cuenta de excesos en facturación y cambios indebidos de medidores: Luis Orlando González, vocal y uno de los participantes del taller, ganó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción de tutela a favor de 60 mil usuarios²¹.

Similar planteamiento podríamos hacer frente a otros espacios que se habilitaron a partir de la Constitución del 91. Nos referimos a participación ciudadana y espacios de democracia real, a creación de verdadero poder desde el constituyente primario, rompiendo ojalá con la perversa tradición de las representaciones delegadas, de vital importancia a la hora de proponerse la visibilización y generación de sujetos sociales autónomos e individuos, como es la intención de Planeta Paz.

²¹ El control de las empresas de servicios públicos debe ser ejercido por las comunidades organizadas, conformando Comités de Servicios públicos y participando más activamente de las Veedurías Ciudadanas para que sean de verdad autónomas. Estos espacios deben estar conformados por líderes profesionales, ex empleados de las mismas empresas: Región Centro, memorias.

²² La agudización del conflicto social con la expansión del paramilitarismo sobre todo en las zonas donde se inicia el desarrollo de macro proyectos económicos situación que se agrava con el conflicto armado, ocasionando el desplazamiento forzado de los damnificados por la violencia, pues los campesinos se ven amenazados por su ubicación en medio de la guerra que vivimos entre guerrilla, paramilitares y los aparatos de seguridad del Estado, además el desplazamiento se origina por la falta de una verdadera reforma agraria y de una política estatal que garantiza la producción y la seguridad alimenticia: Región Pacífico, memorias en las cuales se destaca la propuesta de otorgarle mayor importancia a las experiencias de paz desde el universo de lo cívico.

²³ Por ciudadanía entendemos en principio una ideología cuyos rasgos principales son 1. la creencia de que la democracia es capaz de oponerse al capitalismo 2. el proyecto de reforzar el Estado (o los Estados) para poner en marcha esta política 3. los ciudadanos como base activa de esta política.

²⁴ Director de *Le Monde Diplomatique*, publicación que ahora es editada y distribuida mensualmente en Colombia por el núcleo que edita el periódico «Desde abajo».

²⁵ Las emisoras comunitarias han sido la oportunidad de contar con la radio local, cercana a los habitantes de los municipios, que el desarrollo de la industria radiofónica, en un contexto global, ha venido dejando de lado, aportando relaciones de comunicación cercanas entre la gente, sin ser contradictorias con la tendencia a la mundialización, avanzando en la democratización de la vida: Diagnóstico del Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora en Colombia, Ministerio de Comunicaciones, pág. 85, 2002.

En la etapa que se inicia es necesario abrir mayores espacios a los liderazgos sociales inmersos en dos universos de singular importancia para el Proyecto hoy: la construcción de democracia y poder en escenarios proclives a la paz²². Un reto que trasciende las fronteras que tradicionalmente han caracterizado las agendas cívicas referentes a la demanda de bienes y servicios por parte del Estado, pese al intenso debate que sobre la efectividad de las luchas ciudadanas se viene gestando en otras latitudes a propósito del Foro Social Mundial alternativo, como lo describe Alain C. en «El impasse ciudadanista», publicado originalmente en *Attendant*²³.

En esencia, el debate está planteado por tendencia a sustituir la lucha de clases por la participación política de los ciudadanos, los cuales no solo deben elegir sus representantes sino además actuar constantemente para hacer presión sobre ellos con el fin de que apliquen aquello para lo que fueron elegidos. Pero los ciudadanos - integrados en gran medida por sectores medios de la población venidos a menos- no deben sustituir en ningún caso a los poderes públicos. Pueden, de vez en cuando, practicar lo que Ignacio Ramonet²⁴ llama ahora «desobediencia cívica», ya no «civil», según sus críticos como una forma de definir aquellas personas que de alguna manera forman parte del Estado o cuando menos creen hacerlo.

Independientemente del curso que tomen las discusiones, debemos identificar las formas de relacionamiento y comunicabilidad de las organizaciones cívico-populares, entre ellas y con las restantes organizaciones sociales y el país entero. Nada ganamos con entender muy bien lo que sucede en Colombia y el mundo si ello no lo comunicamos oportuna y eficazmente; y dado el poder y la manipulación de los grandes medios, ello solo podremos hacerlo con imaginación y muchas redes de comunicación alternativas, máxime si tenemos en cuenta la existencia en el país de centenares de emisoras y televisoras comunitarias en Colombia, como una excepción ante el subcontinente y el mundo incluso²⁵, así en este momento no

cumplan en general con los fines para los cuales fueron creadas. Son o pueden llegar a ser formas muy importantes de resistencia popular, en el mejor sentido de la expresión, desde el punto de vista de la generación de contrainformación. Canales de información horizontales, ya no verticales. Más vale, en la dirección que vienen cobrando las luchas invisibles contra la globalización capitalista, las cuales en nuestro país han podido tener expresiones bien particulares.

Esfuerzos como los de las Constituyentes que irrumpen con fuerza en Tolima y Nariño tienen como precedentes el involucramiento de la comunidad en el debate, en temas de medular importancia como los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales, pero también el ordenamiento, la planeación y el presupuesto nacional. Otra cosa es el impacto real de dicho involucramiento popular al momento de ejecutarse las políticas públicas.

Pero lo cierto es que estamos frente a un creciente interés social en los asuntos públicos. A tono incluso con algunas tendencias de gobiernos democráticos en ejercicio en diversos lugares del mundo. Es el caso de las experiencias del Presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil, que le permite a los residentes participar directamente en la elaboración del presupuesto de la ciudad para que, de esa manera, dineros públicos que anteriormente se desviaban para el pago de favores clientelistas puedan orientarse ahora a la provisión de bienes públicos tales como el mantenimiento de vías y servicios como el de acueducto. También sería el caso de las reformas de Panchayat en los Estados de Bengala Occidental y Kerala, en la India, las cuales han creado canales democráticos y representativos que depositan un considerable poder administrativo y fiscal en los niveles locales de las aldeas. O los mismos Consejos vecinales de gobierno en Chicago y las formas de planeación para la conservación del hábitat en Estados Unidos²⁶.

Asuntos propios de la globalización tratados a nuestra manera en lo doméstico, involucrándonos en otros debates. Es posible, por ejemplo, que aquí necesitemos utilizar mejor los símbolos. En momentos de desarticulación y desmembramiento de las organizaciones sociales, símbolos como el del elefante, el ahorcado por el sistema UPAC – que ahora se llama UVR–, o las ollas vacías pueden ser tan efectivos aquí como en Argentina lo han sido las Madres de la Plaza de Mayo o las cacerolas. En otras latitudes, por ejemplo, los trabajadores en paro o desempleados juegan un rol tan activo que pese a la dispersión ejercen una importante incidencia en las políticas de sus

²⁶ FUNG, Archon y Erik Olin Wright, «Democracia en profundidad, nuevas formas institucionales de gobierno participativo con poder de decisión», memorias del primer seminario del Proyecto Utopías Reales, realizado en enero de 2000 en la Universidad de Wisconsin en Madison, Wisconsin, Estados Unidos, y publicadas por la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia en febrero de 2003.

Estados, a fuerza de hacerse notar alrededor de una olla comunal que hierve al calor del piquete²⁷, unas esquinas o plazas envueltas en Rondas, piquetes y cacerolas²⁸.

Es necesario, por tanto, insistir en vincular al Comité Sectorial y demás espacios, visiones distintas de las que hasta ahora han creído en Planeta Paz, tal vez movidos por el interés de encontrar allí la confluencia que hasta ahora las prevenciones de izquierda y de derecha les han negado. Nos referimos en particular a la necesidad de ampliar el espectro de liderazgos comunales, de usuarios de los servicios públicos, y de incursión en política con proyectos exitosos y no exitosos que tienen en común su interés en reivindicarse como independientes del establecimiento, de la izquierda tradicional, de los partidos tradicionales y, de manera especial, de los actores de la guerra que cada vez parecen incidir con mayor fuerza en el conjunto de las organizaciones sociales.

Finalmente debemos señalar que la Agenda que logre materializarse desde el sector cívico popular corre el riesgo o la fortuna de involucrar puntos neurálgicos de los distintos actores sociales colombianos. Su grandeza radicaría en trascender sus propias fronteras proponiendo formas de articulación y resistencia frente a los avatares del modelo, articulándose incluso a campañas continentales como la propia lucha contra la imposición del Tratado de Libre Comercio, ALCA, sin descuidar las particularidades que le son propias, fortaleciéndose como

el sector social que es y ha sido, pero que también debe ser. Especialmente ante los retos que deparan a la humanidad hoy las transnacionales de la economía y en momentos en los cuales la consigna del llamado «Eje del mal» pretende coparlo todo, arrasando con cuanto concepto de soberanía encuentran a su paso, como empieza a manifestarse con las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios ahora en manos de inversionistas particulares de origen extranjero.

¿Acaso ese no fue el mérito de las protestas populares del litoral Atlántico en julio de 2002? Allí la pelea fue contra la multinacional energética Unión Fenosa que cortó el servicio a propios y extraños, generando serios problemas de orden público a los gobiernos locales y regionales, a los cuales desconoció y desatendió por completo, amparada a través de Electricaribe y Electrocosta, sus subsidiarias, en expresas normas de mercado y comercio contempladas en la Constitución nacional. Como igual

²⁷ GONZÁLEZ, Cecilia. ¿Los piqueteros listos para gobernar?, Cecilia González, La Jornada, 19 de enero de 2003: «el principal fenómeno argentino de protesta social del último año fue conformado por desempleados de barrios dispersos en todas las provincias, seguidores de un escrupuloso ritual que inician con el bloqueo de las rutas de acceso a Buenos Aires o las principales avenidas de esta y otras ciudades. Ahí los piqueteros (piquetes son los cierres de carreteras) levantan barricadas, queman llantas, lanzan consignas, se enfrentan con la policía, exigen planes sociales. Y los obtienen, ganando presencia política.

²⁸ ZIBECHI, Raúl. *La creatividad y el cambio van de la mano*, Pensamiento crítico, junio de 2002.

parece repercutir en Emcali, donde una de las «fórmulas» de supuesta salvación consistiría en la llamada capitalización social que dejaría a los usuarios a merced del sistema financiero internacional ante la mirada complaciente de nuestros gobernantes.

Elementos de Agenda

Para concluir, aventuremos una propuesta de Elementos Agenda Sectorial, si es que en el universo de lo cívico podemos aventurar el diseño de una gran agenda, y teniendo en cuenta que a partir del trabajo adelantado por Planeta Paz han emergido propuestas como las del Pliego Andino por la Vida²⁹.

En tres grandes nodos podríamos tratar de integrar el universo enorme de ámbitos en los cuales se mueven las acciones colectivas que suelen identificarse bajo el calificativo de «cívico»:

- Servicios públicos e impuestos:
 - Prestación e implementación.
 - Tarifas.
 - Tasas impositivas y gravámenes.
- Ampliación de la democracia:
 - Espacios de control ciudadano.
 - Participación política.
 - Autodeterminación y territorialidad:
- Descentralización.
- Planeación.
- Ordenamiento.
- Pueblos étnicos y raizales.
- Hábitat.
 - Vivienda.
 - Salud.
 - Educación.
 - Obras de infraestructura y desarrollo.

²⁹ Un pliego para la paz de Colombia y la Región Andina: «Suramérica padece una guerra de expropiación de sus recursos desde hace más de 500 años. Las grandes fortunas que construyeron el mundo actual se hicieron con nuestras riquezas y la sangre de nuestros antepasados arrebatadas con fuego y corrupción sin piedad.

Fuera de la devastación económica y espiritual sufrimos indicadores de vida y desarrollo y soberanía espantables y vergonzosos. Proponemos luchar por:

- La re-unión de los anhelos y esperanzas de todos los que vivimos de nuestro trabajo y del respeto a los demás.
- Un listado de propósitos para construir y conservar la Región Andina que queremos y necesita toda la humanidad, comprometidos con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro.
- La integración de todas las organizaciones sociales para planear el desarrollo regional autónomo y solidario a 20 y 50 años, teniendo como medida única el bienestar integral del ser humano.

Tenemos el derecho, tenemos el sueño, tenemos la necesidad imperiosa, y tenemos el recurso más importante: nosotros mismos.» Bogotá, noviembre 15 de 2003.

El gran interrogante es de método. Es decir, hallar una estrategia mediante la cual se ligue la inmensa gama de posibilidades que cada nodo nos plantea en un programa de acciones donde todas esas expresiones cívico populares se encuentren representadas, partiendo de la carencia de una forma organizativa de carácter nacional que les albergue en la actualidad. Es posible entonces que no quede otro camino distinto al de trabajar por el diseño de una serie de agendas temáticas.

Solo mediante la implementación de una estrategia tendiente a introducir las reformas necesarias a la Constitución Nacional podríamos en el mediano plazo contar con las bases necesarias para brindarle a los colombianos el establecimiento del Estado social de derecho que la Carta del 91 prometió, apenas un escaño en la construcción del país que queremos. Mientras desde el mundo de lo social maduramos lo necesario hasta construir una propuesta propia del modelo de sociedad que más se acerque al imaginario colectivo, es necesario avanzar en cada uno de los nodos propuestos, y en varias direcciones al tiempo.

En materia de servicios públicos y gravámenes impositivos surgen interrogantes de medular importancia: ¿bastaría con introducir reformas sustanciales a las leyes que los regulan para responder adecuadamente a las inquietudes y expectativas de usuarios y ciudadanos? Si ello no es suficiente ¿debemos impulsar nuevas leyes que restituyan, como en salud y educación, los principios de solidaridad y corresponsabilidad del Estado en su adecuada y oportuna prestación, con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y equidad?

El papel del Estado en garantizar la oportuna y eficaz prestación de servicios públicos a la comunidad, incluidos los de salud, educación y transporte, también es sujeto de discusión. Y, por tanto, sería debatible la corresponsabilidad u obligatoriedad del Estado en tal sentido. El dilema, a la postre, es sencillo: si dichos servicios básicos o una porción importante de ellos hoy se encuentran en manos de inversionistas particulares, no parecería factible descargar sobre ellos, los inversionistas, funciones sociales que riñen con las leyes del mercado y no necesariamente arrojan los dividendos económicos que en últimas constituyen la razón de ser del empresario capitalista. Pedirles que tengan consideración con los usuarios en un país en crisis, sería tanto como luchar por humanizar el capital, a la manera de la Tasa Tobin³⁰ que empieza a ser acogida en naciones como India.

³⁰ Propuesta de ATTAC, organización de la cual hace parte Ramonet, tendiente a gravar las transacciones multinacionales y transnacionales del capital y destinarlas para obras de beneficio social.

La evasión de impuestos continúa siendo, tal vez, el principal flagelo del fisco nacional, especialmente por cuenta de las grandes

empresas y los inversionistas extranjeros. Máxime si tenemos en cuenta que de cada peso recaudado la mitad está comprometido en el pago del servicio de la deuda al tiempo que el 30 por ciento del mismo es devorado por la guerra y el conflicto interno. Queda, pues, escasamente un 20 por ciento para gastos de funcionamiento e inversión social. En esas condiciones, ¿qué propuesta de fortalecimiento del fisco público tienen las organizaciones cívicas?

La participación ciudadana, en términos generales bien adoptada por la Constitución de 1991, no puede continuar siendo parte del paisaje colombiano, imposibilitándonos por esa vía acercarnos a conceptos más reales e integrales de democracia. Al constituyente primario hay que comprometerlo más en el uso de los mecanismos de participación que hoy dispone. Pero, aún así, es decir, puede resultar inocua si su voz y opinión carecen obligatoriedad y poder de decisión, tendientes a transformar al ciudadano en verdadero sujeto político, ya no solo objeto. Las llamadas audiencias públicas a las que distintas entidades oficiales convocan a la comunidad e integrantes de los comités de control, deben responder a las expectativas creadas en el constituyente primario. La pregunta sería si cumplen o no los organismos públicos y privados con las obligaciones constitucionales que les son inherentes, por el hecho de escuchar algunas voces de la gente.

En esa misma dirección debe entenderse la necesidad de introducir reformas sustanciales a las costumbres políticas del país, otorgando reales posibilidades de acceso a los órganos de poder a las minorías étnicas y políticas, a las mayorías marginadas del campo y la ciudad. Tanto en materia de planeación y ordenamiento, como de descentralización para la integración. Pero, ¿cómo y con qué recursos hacerlo? ¿Cómo ampliar los conceptos de autodeterminación y territorialidad que finalmente se reconocieron a los pueblos indígenas, extendiéndolos a la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

Finalmente deberíamos delinear el lugar y espacio que el Estado colombiano brinda a cada uno de sus asociados. ¿Debe estar dotado de vivienda? ¿Qué clase de vivienda? ¿Con garantías de acceso a la educación, la salud, el esparcimiento y la información, partes sustanciales de los derechos fundamentales de todo ser humano? ¿Cuál es, en últimas, la ecología de la vida que podríamos plantearnos desde el universo de lo cívico popular?

